



Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00116-00
ACCIONANTE: CARLOS ARTURO RUIZ SIERRA
ACCIONADAS: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD-
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN
CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

Procede el Despacho a decidir sobre la remisión de la acción de tutela del asunto de la referencia, por competencia.

1. El accionante **CARLOS ARTURO RUIZ SIERRA** identificado con cédula de ciudadanía 79.239.766, instauró la presente acción constitucional en contra de la **SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD- SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN**, en procura de la protección de los derechos fundamentales de petición y debido proceso.

En resumen, en el escrito de tutela se afirma que el actor presentó demanda ante la autoridad accionada con mirar a obtener el reconocimiento y pago de una incapacidad expedida a su favor. Se señala que una vez surtido el trámite procesal respectivo, mediante sentencia S2021-001234 de 1 de julio de 2021, la autoridad accionada accedió al pago de la incapacidad por parte de la EPS Famisanar.

Se afirma que el 10 de enero de 2022, instauró una petición ante el Tribunal Superior de Bogotá con el fin de obtener información respecto al envío del expediente para que se surtiera el recurso de apelación interpuesto por la EPS. Famisanar, y que el Tribunal Superior de Bogotá mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022, respondió que a la fecha no había recibido el expediente del proceso. Por tal razón, se sostiene en la tutela que el 10 de enero de 2022, solicitó información ante la Superintendencia para que le informara la fecha del envío el expediente al Tribunal Superior de Bogotá para que se resolviera el recurso de apelación interpuesto, sin que a la fecha hubiese obtenido respuesta alguna.



2. Sobre la competencia para conocer de las acciones de tutela, el Decreto 2591 de 1991, precisa en el artículo 37 que son competentes a prevención, todos los jueces o tribunales del territorio nacional donde hubiese ocurrido la violación o amenaza que motiva la presentación de la solicitud. A su turno, el Decreto 333 del 06 de abril de 2021, *"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"*, dispone lo siguiente:

"Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:

"Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(...)

10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial." (Resaltado fuera de texto)

3. En el caso concreto, el Juzgado advierte que la acción se encuentra dirigida en contra de la Superintendencia Nacional de Salud- Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, que ejerce funciones jurisdiccionales en desarrollo de lo previsto en el artículo 116 Superior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007. En consecuencia, esta Agencia Judicial considera que no es competente para conocer de la presente acción, habida cuenta que acorde a lo dispuesto en la norma transcrita, por el ejercicio de la función jurisdiccional de la autoridad contra quien se dirige la tutela, la competencia para resolver la tutela recae en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Lo anterior, dado que el domicilio de las partes coincide con el lugar de la ocurrencia de la violación o amenaza que motiva la presentación de la solicitud (art. 37 Decreto 2591 de 1991).

El Juzgado reconoce que la Corte Constitucional ha precisado que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015 y demás normas de carácter reglamentario, en modo alguno constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. No obstante, en el Auto 216 de 2019 (MP. Diana Fajardo Rivera) la misma Corporación aclaró de manera



reiterada que las consideraciones expuestas no impiden que la autoridad judicial que conozca un conflicto de competencia aparente, suscitado con base en reglas de reparto, devuelva el expediente al despacho al que le corresponda su conocimiento en virtud de tales reglas, así se modifique la asignación inicial, si se encuentra que se ha realizado un reparto caprichoso¹. Este ocurre cuando existe una “*manipulación grosera*”² de las reglas de reparto, que se presenta, por ejemplo, en el caso de una “*distribución equivocada de una acción de tutela interpuesta contra una providencia judicial emanada de una de las Altas Cortes*”³; o en aquel “*en que se reparta caprichosamente una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente del superior funcional del que dictó el proveído*”⁴.

Dado que en este caso no se observó la regla de reparto respectiva que asigna el conocimiento de la acción de tutela a los tribunales superiores de distrito judicial, por estar dirigida contra una decisión de la Superintendencia de Salud adoptada en virtud de funciones jurisdiccionales, es menester remitir el expediente al mencionado Tribunal Superior de Bogotá para lo de su cargo.

En virtud de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: ABSTENERSE de conocer la presente acción de tutela por carecer de competencia.

SEGUNDO: REMITIR por competencia la acción de tutela instaurada por el señor CARLOS ARTURO RUÍZ SIERRA, de manera inmediata a la OFICINA DE

¹ Se aclara que los pies de página 1, 2 y 3 corresponden al Auto 216 de 2019, emanado de la Corte Constitucional. “Esta posición fue establecida por la Corte en el auto 124 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esa ocasión, esa Corporación consideró que, si bien no es posible promover conflictos de competencia con base en las reglas de reparto, esto no lleva a desconocer su validez. Por consiguiente, “*deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario*”. Esta postura ha sido reiterada en el auto 198 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), que ha sido tenido en cuenta de manera continua por la Corte en los pronunciamientos subsiguientes y, más recientemente, en los siguientes autos: 365 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 378 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 525 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; 588 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; y 293 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

² Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

³ Auto 124 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

⁴ Auto 198 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. La Corte, incluso, ha llegado a sostener, en el auto 073 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), por ejemplo, que “*no es acertado que una autoridad par o de inferior categoría resuelva el amparo que se presenta contra por ejemplo un alto tribunal*”. Esta providencia se reitera en el auto 372 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).”



REPARTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, para que asuman el conocimiento de la acción constitucional.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión al accionante.

CUARTO: Por secretaría, dejar las constancias respectivas y dar cumplimiento a lo aquí ordenado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ**

A.O.-

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo

010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **47970838c98accf222cc753aaf94317d83c9d9abc57e01387a80f99f70629120**
Documento generado en 19/04/2022 03:50:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>